

El Salvador 20 años después de los acuerdos de paz: perspectivas salvadoreñas y estadounidenses

Patrocinado por: El Instituto Moakley de la Universidad de Suffolk y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Escuela de Derecho de la Universidad de Suffolk.

Lunes, 9 de abril del 2012

DESAFÍOS PARA EL SALVADOR: 20 AÑOS DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS JAMES P. MCGOVERN (MA)

Geoff, muchas gracias por esa introducción tan amable. Quisiera agradecer a la Universidad de Suffolk, al Instituto y Archivo Moakley, y a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) por organizar y auspiciar este evento tan especial.

Es un placer estar aquí esta tarde con un panel tan distinguido, incluyendo a dos viejos colegas y amigos, Geoff Thale de WOLA y al Embajador Francisco Altschul. Conozco a Francisco desde principios de los años ochenta. A veces pienso que es casi un milagro el poder trabajar con él ahora como embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Digo un milagro, no solo porque el FMLN ganó las elecciones presidenciales en el 2009, sino también porque a menudo se encontró en situaciones muy vulnerables durante la guerra. Muchos de sus amigos y colegas no sobrevivieron. Así que es maravilloso que ahora sirva a su país en Washington. Es un embajador excepcional y un representante de su país y su gente.

A Geoff lo conozco desde los comienzos de los años noventa; si bien recuerdo, unos años antes de la firma de los acuerdos de paz. Existen muy pocas personas que tienen el conocimiento profundo sobre El Salvador que él posee. Tiene esa cualidad poco común de poder ver temas complicados y polémicos con compasión y, a su vez, objetivamente. Respeto su análisis sobre los sucesos y eventos que ocurren en el país. También aprecio su ten-

dencia de finalizar largos días en El Salvador con una copa en un bar; una costumbre que yo comparto.

Siempre es especial para mí estar en la Universidad de Suffolk y en el Instituto de Moakley. No tengo palabras para describir cuánto me afectó el poder trabajar para el congresista Joe Moakley. Fue un honor tener a Joe como jefe, mentor, y amigo. Fue una bendición el poder servir en el Congreso junto a él por lo que terminó siendo un tiempo demasiado breve. Después de mi juramentación como miembro del Congreso, recuerdo mi primera reunión del Comité Demócrata. Me acerco a Joe, él me ve y me dice que vaya a comprarle un café y un sándwich. Me di cuenta inmediatamente de que yo era un miembro novato hablando con el decano superior de la delegación de Massachussets. A menudo, pienso en qué diría él sobre el estado actual de las Américas. Más al caso de la discusión de hoy, Joe me dio El Salvador. En 1983 me envió a El Salvador para averiguar qué estaba ocurriendo, y mi compromiso con el país y su gente no ha flaqueado desde entonces.

Cuando los históricos acuerdos de paz fueron firmados en México a principios de 1992, dando fin a doce años de guerra civil en El Salvador, muchos de nosotros anticipamos una nueva y próspera era. Perdí muchos amigos durante la guerra. El Salvador perdió muchas de sus mentes y corazones más brillantes. Cada familia y comunidad en El Salvador fue afectada. El informe de la Comisión de la Verdad de la ONU describió la guerra como “la locura” de violencia. Sin duda, ahora que se habían firmado los acuerdos de paz, las cosas serían diferentes.

En muchos aspectos, la situación sí fue diferente. La competencia política afloró, los procesos electorales maduraron, los partidos políticos formaron coaliciones y se organizaron año tras año. El partido que gobernaba durante los últimos años de la guerra civil, ARENA, mantuvo su poder después de los acuerdos de paz, ganando elecciones consecutivas por los siguientes 17 años. En 2009, tras casi dos décadas de fortalecimiento institucional del partido y victorias municipales y legislativas, el FMLN, partido opositor, ganó la presidencia. Fue un momento que marcó un hito en El Salvador.

Pero, lamentablemente, otros aspectos no vieron cambios tras la firma de los acuerdos de paz. La capacidad de los tribunales y del sistema jurídico salvadoreño de hacer rendir cuentas a miembros de las élites, funcionarios de gobierno y miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad por la comisión de crímenes, incluyendo crímenes de derechos humanos, continuó fracasando, reforzando con ello la cultura de impunidad.

La ubicación geográfica de El Salvador por supuesto que tampoco cambió. El país sufre anualmente de inundaciones, terremotos frecuentes y otros desastres naturales. El impacto de estos desastres se amplifica por iniciativas de desarrollo del pasado mal concebidas y por la degradación ambiental; ambos desastres ocasionados por el ser humano.

Los pobres tampoco se vieron beneficiados del comercio, y la inversión y ayuda internacional ha disminuido considerablemente, incluso la ayuda económica de los Estados Unidos. La migración anual de miles de salvadoreños hacia los Estados Unidos es tan grande como lo fue durante la guerra civil.

Algunas cosas empeoraron. Nunca me hubiera imaginado que la violencia en El Salvador empeoraría después de la guerra, pero empeoró. Redes criminales –salvadoreñas, mexicanas, y colombianas– se han implantado en el país. Estas redes trafican drogas, armas, seres humanos y contrabando por todo el hemisferio. Pandillas juveniles son aprovechadas, comunidades de bajos recursos son aterrorizadas, y autoridades judiciales y de seguridad son corrompidas. Los niveles de criminalidad, violencia y homicidios han incrementado considerablemente.

Este no es el futuro que ninguno previmos para El Salvador, pero es la realidad que heredó Mauricio Funes cuando asumió la presidencia en 2009. Creo que el embajador Altschul comentará más específicamente sobre cómo el Gobierno de Funes ha tratado de responder a esta realidad.

He conocido al presidente Funes y lo respeto. Él, junto con muchos de sus funcionarios, son personas pragmáticas y creativas, comprometidas a responder a los muchos desafíos que enfrenta El Salvador. Mas o los nuevos gobiernos cuentan con una pequeña ventana para demostrar cambios y beneficios tangibles, o la población pierde la fe, se enoja y se torna amarga hacia el partido en el poder.

Desafortunadamente, existen todavía problemas institucionales que datan de tiempo atrás y que continúan siendo obstáculo para la promoción de reformas, la búsqueda de la justicia y la consolidación democrática. La Fiscalía continúa siendo un lugar donde la justicia va para morir. Innumerables casos de homicidios, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros crímenes permanecen estancados en sus pasillos. Lastimosamente, la impunidad continúa siendo la norma en El Salvador.

Bajo administraciones anteriores, la Policía Nacional Civil se vio fuertemente infiltrada por el crimen organizado. Hay que reconocer que durante sus primeros dos años y medio de gobierno, el presidente Funes logró avances importantes en la depuración de la institución y la profesionalización de sus filas.

A medida que el crimen organizado y los cárteles de la droga penetran y consolidan su control en Centroamérica, incluyendo a través de la utilización de pandillas existentes, los índices de homicidios han ido aumentando considerablemente a lo largo de la región. Por ello no es sorprendente que la seguridad sea la principal preocupación del salvadoreño común. Al igual que estas organizaciones criminales han hecho en otras partes, desde Colombia hasta México, la corrupción de las instituciones políticas y económicas, de las élites, de los partidos y de los políticos es un elemento crítico de su estra-

tegia para controlar el territorio, proteger sus rutas y ganancias, y para evitar su captura y persecución penal.

El Salvador se encuentra nuevamente en una encrucijada, enfrentando decisiones difíciles y amargas. Yo lo veo como un momento de oportunidades. Creo que el presidente Funes y su Gobierno tienen la oportunidad de traer un cambio histórico en El Salvador. Este esfuerzo requerirá valor y visión, pero estas son cualidades que abundan dentro del actual Gobierno.

En las semanas que vienen, el período del actual fiscal general y de otros funcionarios clave terminará y el Congreso salvadoreño será el que nombrará al próximo fiscal general y otros funcionarios claves. Tengo la esperanza de que el presidente Funes aprovechará esta oportunidad para urgirle al Congreso a considerar únicamente los nombres de candidatos con carácter y credenciales impecables, quienes no responden a la política partidaria salvadoreña y quienes están comprometidos –mente, corazón, cuerpo, y alma– a romper la cultura e historia de impunidad de El Salvador.

Esto no será fácil. Ningún proceso importante, y mucho menos histórico, es fácil. Hay rumores de que el actual fiscal general quiere ser reelegido. Lamentablemente, la cultura de impunidad ha permanecido intacta bajo su dirección. En mi opinión, deberá ser alentado a dejar el puesto con gracia.

No sobra la especulación sobre quienes más podrán estar interesados en el cargo, pero muchos de los nombres que ha mencionado la prensa salvadoreña son individuos con intereses arraigados en uno u otro partido político, no son conocidos por su compromiso con el bien común del país, y algunos se cree presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado y la corrupción.

Así que el presidente Funes tiene la oportunidad de sorprender a todos, de sacudir la tradición y de promover la admisión de candidatos completamente por encima de la riña política; candidatos cuyas credenciales legales y jurídicas no puedan ser cuestionadas, y más importante aún, que no han sido comprados por uno u otro interés. El presidente Funes tiene la oportunidad de romper el molde y, en este sentido, de abrir las puertas de la historia e iniciar el comienzo del final de la impunidad y la corrupción.

Sí se puede lograr. Ha ocurrido en otros países. En Colombia, el presidente Santos, al igual que el presidente Funes, también heredó un Gobierno corrupto, cuyos ministros de gabinete, funcionarios de alto nivel y numerosos funcionarios electos debieron su éxito a los paramilitares, al crimen organizado y a las élites corruptas. Después de la elección de Santos y el nombramiento de un nuevo fiscal de parte de la Corte Suprema, investigaciones sobre casos de corrupción y actividades criminales fueron realizadas agresivamente. Muchos funcionarios de alto rango enfrentan actualmente o han enfrentado procesos judiciales, han sido procesados, sentenciados y encarcelados por corrupción y otros crímenes.

Lo mismo puede ocurrir en El Salvador con el fiscal general adecuado. Ello, sin embargo, requerirá ignorar las presiones y ofertas tentadoras de poderosos intereses. Implicaría mirar a ARENA, GANA, y al FMLN a los ojos y decirles, “No, esta vez no. Esta vez El Salvador va a contar con un fiscal general comprometido a luchar por la justicia”.

Lo mismo aplica al nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema, solo que la decisión no es tan difícil, dado que varios de los magistrados actuales han demostrado en estos dos últimos años ser dignos y merecedores de su reelección. Nombramientos nuevos deben contar con candidatos que estén por encima de intereses partidarios y cuyas credenciales sean impecables.

Esto me trae a la situación de las fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional Civil. En los últimos meses ha habido varios cambios en la institución. Por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz (algunos académicos consideran que en violación de los acuerdos) se ha nombrado a un miembro de alto rango del ejército como ministro de Seguridad, y a otro como director de la Policía, mientras que otros miembros del Ejército han sido asignados a puestos claves o como consejeros dentro de las instituciones y oficinas encargadas de la seguridad. Estos oficiales fueron dados de baja para poder tomar sus nuevos cargos, mas no hay duda de que su formación, sus conexiones y su orientación es, en el fondo, militar.

En el interés de ser honesto y transparente, expresé al presidente Funes mi propia preocupación sobre el nombramiento de un general del Ejército como ministro de Seguridad cuando se estaba debatiendo. El nombramiento se ha dado y acepto la decisión del presidente. Lo que se ha tornado más preocupante no es el nombramiento del ministro sino los nombramientos de militares a posiciones claves en la policía y los servicios de inteligencia estatal, la *penetración* de un enfoque militarista en el Ministerio y en su estrategia, rumores de que algunos de estos asesores y policías tienen vínculos con el crimen organizado, y el nombramiento a posiciones claves de oficiales policiales que habían estado bajo investigación por supuestos vínculos con redes criminales.

No estoy en posición para juzgar la veracidad de estos rumores, pero considero que el presidente Funes puede transformar esta posible desventaja en una oportunidad para llevar a cabo acciones decisivas y responder con confianza a estas preocupaciones. Nombrar en la posición de inspector general de la Policía Nacional Civil, posición actualmente vacante, a alguien del más alto calibre, sin vínculos a políticas partidarias, y comprometido a combatir la corrupción y la infiltración criminal de las instituciones de seguridad ciudadana. Dicho individuo tendrá grandes zapatos por llenar. La ex inspectora general, Zaira Navas, con el respaldo del presidente Funes, emprendió una depuración histórica en la Policía Nacional Civil. Pudo haber logrado más –y como país, El Salvador hubiera logrado más– si el fiscal general hubiera avanzado y procesado judicialmente a por lo menos uno de los

varios casos criminales sobre “policías sucios” que la inspectora le remitió, y si la Asamblea no hubiera puesto obstáculos en varias de las investigaciones.

Es crucial que nadie deshaga los avances históricos que ha logrado el presidente Funes en los últimos dos años y medio en los procesos de depuración de la policía. Si existen acusaciones sobre la restitución de algunos de los “policías sucios”, permitan que un inspector general de confianza e incorruptible investigue estas acusaciones. Si hay rumores sobre nexos entre algunos de los recientes nombrados militares y asesores y el crimen organizado, permitan que el próximo inspector general investigue estos vínculos. Y si dichas investigaciones encuentran que las acusaciones tienen mérito, despidan a esos oficiales y funcionarios y exijan al nuevo fiscal general procesar judicialmente estos casos.

Como mencioné anteriormente, los homicidios han aumentado en los últimos años. La seguridad ciudadana es la preocupación más importante para los salvadoreños, especialmente para aquellos que viven en comunidades bajo control de las pandillas.

Sin embargo, hace poco la tasa de homicidios disminuyó dramáticamente, de un promedio de catorce al día, a cinco. Esto parece ser el resultado de una tregua negociada con líderes claves de las pandillas. El periódico digital, *El Faro*, reveló la historia. Aplaudo su valiente periodismo investigativo. El tema de quién negoció esta tregua está bajo debate. ¿Fue el Gobierno o miembros del Ministerio de Seguridad? ¿Fueron miembros de la Iglesia católica? ¿Qué recibieron las pandillas a cambio? ¿El traslado de líderes a cárceles con seguridad mínima donde se permiten más privilegios y comunicación con el mundo externo? ¿Algo más?

Es importante que los salvadoreños conozcan las repuestas a estos interrogantes. Pero es importante que el número de personas asesinadas diariamente haya disminuido dramáticamente. Es muy importante. Y lo que pase próximamente es igual o tal vez aún más importante.

Si miramos el caso del Milagro de Medellín, en Colombia, sabemos ahora que la dramática reducción de la violencia y los asesinatos en los barrios más pobres ocurrió a raíz de una negociación con uno de los principales jefes paramilitares, don Berna, por control de estas zonas. Los asesinatos cesaron, pero la actividad criminal continuó. La extorsión se expandió y las rutas para el tráfico de drogas se consolidaron.

La buena noticia es que, a medida que disminuían las peores formas de violencia, Medellín tuvo varios años para recuperarse, y bajo la visión progresista de dos alcaldes consecutivos pudo invertir en el desarrollo económico, la sociedad civil y las comunidades pobres. La ciudad floreció. Pero luego, el milagro se transformó en la Pesadilla de Medellín. Don Berna fue extraditado a los Estados Unidos por tráfico de drogas. Una lucha de poder por el control de rutas y negocios criminales ahora muy lucrativos se produjo

y consecuentemente hubo un incremento en la violencia y los asesinatos. En el 2010, líderes religiosos y de la sociedad civil negociaron una tregua entre los líderes de las pandillas, pero esta duró apenas unos pocos meses y la lucha por el poder y territorio estalló nuevamente. Medellín estaba compitiendo con Ciudad Juárez por el título de la capital mundial del homicidio. Los asesinatos, la violencia, la extorsión, el narcotráfico y las redes delictivas continúan. Lo sé. El pasado agosto estuve tres días en Medellín, principalmente en estos barrios en conflicto. Hablé con representantes de todos lados, y he oído cómo la comunidad intenta ser más resistente a la violencia que les rodea. Medellín es un lugar que inspira; su pueblo inspira; sus jóvenes, en particular, son fuente de inspiración, pero hay lecciones que aprender de esta ciudad.

El Salvador no puede contentarse únicamente con una tregua que reduce la tasa de homicidios –por cuánto tiempo, no lo podemos predecir ni garantizar–. Debe aprovechar este espacio para desarmar y dismantelar las estructuras criminales y las pandillas que han controlado estos barrios durante demasiado tiempo. Y tiene que tomar este paso inmediatamente. No se puede posponer.

No cometan el mismo error de Medellín. No permitan a las pandillas utilizar este espacio para elevar una o dos facciones a intermediarios de poder *de facto*. No les permitan consolidar su control sobre los barrios, sobre actividades criminales, y afianzar más sus nexos con criminales más poderosos y organizaciones del narcotráfico. No permitan a líderes de las pandillas en prisión la posibilidad de gobernar empresas criminales desde la cárcel.

Este debe ser el principio del fin del poder de las pandillas, o la ganancia a corto plazo puede resultar en un mayor dolor a largo plazo.

Si las redes criminales salen más fuertes, se corroborarán los rumores de la infiltración de la Policía, las fuerzas de seguridad y los partidos políticos por elementos criminales.

Y todo lo que el Gobierno de Funes ha logrado en los últimos tres años se verá opacado por la penetración criminal de la nación y de sus instituciones políticas, económicas y de seguridad.

Aprovechen el momento, brinden una mejor opción a los miembros rasos de las pandillas. Brinden una mejor opción a las comunidades más afectadas por la violencia. Brinden una mejor opción al pueblo de El Salvador.

El Consejo de Relaciones Exteriores acaba de publicar un informe sobre la violencia criminal en Centroamérica. El informe describe lo que ya sabemos. La inversión en soluciones militares a la violencia producida por la venta local de drogas, actividades criminales y las pandillas no funciona. Lo que funciona es la inversión en la educación, el empleo digno y el desarrollo comunitario. Lo que funciona es la inversión en una policía profesional, libre

de la corrupción y la influencia de redes criminales. Lo que funciona es la inversión en un sistema judicial fuerte e independiente que investiga, procesa y sentencia a criminales, políticos y élites corruptos.

El Salvador tiene la oportunidad de hacer lo que ya sabemos funciona.

Existe la oportunidad de hacer, de un momento de crisis política y de seguridad, un cambio histórico y duradero.

Creo que el presidente Funes y su Gobierno tienen el valor y la visión de aprovechar este momento, de desafiar a los críticos, enfrentar a los intereses partidarios y, a menudo, corruptos de las élites y de los partidos políticos –GANA, ARENA, y hasta algunos elementos del FMLN–.

El Salvador se encuentra en una encrucijada. Las decisiones, para bien o para mal, hay que tomarlas ahora. Si El Salvador aspira a ser un líder entre democracias, él mismo debe ser un modelo de democracia.

Apoyaré al presidente Funes –y haré todo lo que este en mi poder para asegurar que el Gobierno de Obama apoye al presidente Funes– si decide aprovechar este momento y crear un cambio histórico para el beneficio de su país.

Un cambio que respeta los derechos humanos y el Estado de derecho, un cambio que rompe con la impunidad, un cambio que promueve el desarrollo, y un cambio que crea un ambiente de paz y reconciliación. Un cambio que ayude a crear el futuro que todos soñados tras la firma de los acuerdos de paz.

**Traducción informal por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).*